

¿Indignados o resignados?: convivir con la corrupción

Las revelaciones sobre la ruta del dinero K, instaladas en las conversaciones cotidianas, se suman a una historia de escándalos que resuenan en la memoria colectiva y que, combinados con la impunidad, parecen naturalizarse casi como un mal necesario de la democracia

Por Raquel San Martín | LA NACION

¿A qué le recuerdan las bóvedas santacruceñas y los bolsos que transportan dinero que se puede pesar? Probablemente, a valijas llegadas de Venezuela, a billetes ocultos en un baño ministerial, a una Banelco en el Congreso, a armas de contrabando, a guardapolvos, al PAMI, a diputuchos, a leche adulterada. En efecto, las revelaciones sobre la ruta del dinero K que desde hace semanas se difunden por entregas en el programa de Jorge Lanata, con ampliaciones en otros medios y repercusiones en la Justicia, parecen haber puesto al país en un terreno conocido: funcionarios que usan a discreción los recursos públicos y se enriquecen de manera fraudulenta, casi en un *déja-vu* de los 90 que el gobierno kirchnerista dice haber sepultado. Al listado de escándalos que en el país atraviesa décadas, gobiernos e ideologías, bonanzas económicas y crisis, hay que sumar la falta de castigo para esos delitos: causas extinguidas por falta de pruebas, por escasez de coraje judicial o por el mero paso del tiempo.

La corrupción y la impunidad se perciben en la Argentina casi como un mal endémico e irresoluble, generalizadas en los funcionarios políticos e instaladas en el entramado social.

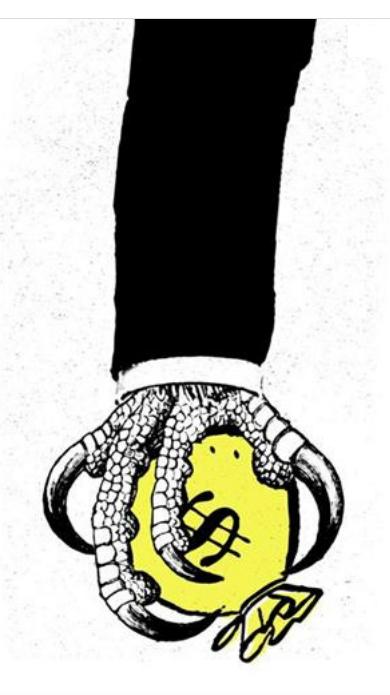
Y, quizás por eso, toleradas socialmente hasta en la vida cotidiana. ¿Qué efectos sociales tiene para los argentinos vivir con la certeza de que los políticos son corruptos y que la malversación de fondos es una práctica inevitable? En principio indigna, pero enseguida aleja: si la política es intrínsecamente mala, incapaz de solucionar los problemas de la gente, pues ocupémonos de otra cosa.

Probablemente por eso, aunque algunos sondeos de opinión empiezan a registrar el impacto de las últimas denuncias en la imagen presidencial, la mayoría de los expertos duda de que la corrupción K que se difunde casi sin desmentida oficial tenga algún efecto en las urnas. Salvo, dicen, que la economía empeore.

Más allá de que existan o no casos de corrupción en la agenda pública, la percepción de corrupción es alta en la Argentina. Según una encuesta regional realizada el año pasado en 26 países, entre 46.000 encuestados de todo el continente, el 79,5% de los argentinos cree que la corrupción es generalizada entre los funcionarios públicos, sólo por debajo de Colombia y Trinidad y Tobago. "La percepción de corrupción es alta, permanece alta y es un fenómeno regional, con excepción de Canadá, Chile y Uruguay", pone en perspectiva Germán Lodola, politólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, encargado del capítulo argentino del sondeo, que realizó el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) de la Universidad Vanderbilt, en los Estados Unidos.

Dos características distinguen a la Argentina en el mapa: el país combina alta "sensación de corrupción" con altos niveles relativos de desarrollo, y con baja experiencia de prácticas corruptas. Según la misma encuesta, sólo el 19,2% de los argentinos dice haber recibido pedidos de coimas por parte de la policía, de funcionarios locales, en el trabajo, en escuelas, tribunales u hospitales, lo que ubica al país en el promedio de la victimización regional por corrupción.

"Los argentinos perciben la corrupción como un mal endémico, especialmente característico y acentuado en la clase política, pero que afecta a toda la sociedad -confirma Virginia García Beaudoux, especialista en psicología política y codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano-. Eso legitima, de algún modo, que los ciudadanos se muestren tolerantes en tres niveles: a la corrupción de los políticos si encuentran en ellos otras «virtudes»; a las «pequeñas corrupciones» cotidianas de los ciudadanos, y a considerar posible y aceptable cometer algún acto de corrupción a mayor escala para obtener un beneficio económico. La impunidad refuerza todos esos sentimientos."



Algunos sondeos empiezan a mostrar cómo las denuncias del caso Lázaro Báez han logrado transformarse en conversación cotidiana: según una

encuesta nacional realizada en abril pasado por Management & Fit, el 76% de la población había visto o escuchado hablar del programa de Lanata y, de ellos, el 53% pensaba que las denuncias eran verdaderas y el 25,7% que lo eran parcialmente. "El tema prendió en la opinión pública con un alto grado de credibilidad. Es difícil saber si impacta en la imagen presidencial, pero hay algunos indicios que apuntan en esa dirección", dice Mariel Fornoni, directora de Management & Fit. Por ejemplo, según la misma encuesta, casi el 38% de los que conocen el contenido de la reforma judicial creen que el Gobierno la impulsa para asegurar impunidad a los funcionarios kirchneristas y el 21,3% para ocultar actos de corrupción.

EFECTO PEDAGÓGICO

Justamente, las denuncias que se acumulan sin efectos en los tribunales terminan por resultar inocuas para las prácticas corruptas y, casi, por permitir que sigan sucediendo, al foguear la idea de que son casi un mal necesario e inevitable de la democracia. "Hay una cierta naturalización de la corrupción. Y si continúa, y no hay procedimientos confiables por los cuales se termine con esto y no sólo se lo denuncie, la gente se resigna, sobre todo los que tienen menos recursos", dice Martín Böhmer, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador principal de Cippec. Suma otro dato: "Si escuchás que hay bolsas de dinero en la Casa Rosada, ese ejemplo baja. Hay un efecto demostrativo, no sólo descriptivo". En otras palabras, ¿por qué pagar impuestos, si todos evaden?

No todos creen que ese efecto pedagógico de la corrupción en el poder condicione directamente las acciones de los ciudadanos. "El mal ejemplo y la falta de castigo no tienen un canal directo de transmisión hacia la gente. Que haya funcionarios corruptos e impunes no se transmite obviamente a los comportamientos sociales. Si hay mecanismos informales en la vida cotidiana no tiene que ver necesariamente con la corrupción de los funcionarios públicos, sino con variables sociales y culturales distintas", afirma Lodola.

En un sentido similar, "corrupción" puede ser la manera de decir otras incomodidades colectivas. "Muchos sectores sociales sienten una fuerte ajenidad con la política profesional y suelen nombrar esa distancia con el término corrupción. Cuando esa percepción se extiende, tiende a englobar y enmarcar insatisfacciones de las más diversas y a concentrar responsabilidades en personajes individuales y en el carácter moral o inmoral de sus comportamientos", afirma el sociólogo Sebastián Pereyra, autor de *Política y transparencia* (Siglo XXI), donde vuelve sus investigaciones sobre la corrupción como problema público en el país.

La percepción de corrupción se extiende, en realidad, al poder en general y toca también al otro lado del fraude: los empresarios. "En el país hay una visión muy basada en el mundo privado de los 90, de empresarios actuando en connivencia con los políticos, que ha permanecido bastante inalterada hasta el presente. Hoy esa imagen ya no está ligada a las privatizaciones, sino a la injerencia cada vez más fuerte del Estado en la economía y cómo eso permea las relaciones con las empresas, sobre todo las subsidiadas", señala Gabriel Cecchini, coordinador del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE. "En muchos países centrales, se piensa que los empresarios que van a países periféricos son siempre extorsionados por funcionarios públicos que piden coimas. Los argentinos perciben que los empresarios participan casi en pie de igualdad con los funcionarios en esos hechos", dice. Quizá la percepción provenga de la memoria: en las investigaciones judiciales en los casos de IBM, Siemens o Skanska se descubrieron mecanismos de pago de sobornos, que en algunos casos eran conocidos en las casas matrices de esas empresas.

En cualquier caso, y casi sin que podamos percibirlo, los casos de corrupción agigantan la distancia entre los ciudadanos y la política. "Cuando el ciudadano percibe que la corrupción puede afectar el proceso electoral, distorsionar la voluntad de la gente, la calidad y cantidad de información pública, aparece el efecto más preocupante de la corrupción sobre la democracia -señala Álvaro Herrero, especialista en temas de justicia y transparencia-. Argentina combina herramientas legales muy deficitarias para controlar la corrupción y una sociedad relativamente tolerante a ella. La gente no desconfía de la democracia, sino que cree que la política no es una buena herramienta para solucionar sus problemas."

Sin embargo, a pesar de la alta percepción de corrupción, otros problemas suelen ganarle como preocupaciones colectivas. En las encuestas, y aún en tiempos de escándalos en ebullición mediática, por delante aparecen temas como la inflación o la inseguridad. "Las personas suelen priorizar temas relacionados con su supervivencia y bienestar material (desempleo, inflación, economía) y físico (inseguridad). Y, además, en sociedades como la nuestra, hay una cierta desesperanza aprendida que hace que las personas pierdan la motivación para actuar sobre ese problema, que consideran irresoluble", apunta García Beaudouin.

DOS DÉCADAS EN PERSPECTIVA

¿Hay alguna diferencia entre el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray, Juan Carlos Alderete o Alberto Kohan en los 90, con los bolsos de dinero en la Casa Rosada? "Hay un aspecto preocupante en la corrupción K y es que parece no tanto asociada a la ambición de dinero personal, como en los 90, sino al financiamiento de la política. Esto se agrava porque, después de la reforma política, los partidos opositores tienen muy poco acceso a espacios de difusión, mientras el Gobierno

no sólo tiene millones de pesos de publicidad oficial sino también un circuito oculto de fondos destinados a eso. Se distorsionan seriamente las reglas del juego democrático", dice Herrero.

Mirando la repercusión pública frente a los casos, Lodola encuentra otra diferencia. "Hoy parece haber más sensibilidad social ante estos hechos, porque hay una mayor apertura del espacio público, activada en buena medida por el mismo kirchnerismo. Hay cierta dinamización de la participación social, demandas de accesibilidad y transparencia, y por eso hay más sensibilidad", afirma.

En tanto, el impacto de la corrupción en las urnas es al menos discutible. "Creo que las denuncias y escándalos de corrupción no tienen gran influencia sobre los resultados electorales. Si pueden impactar en las chances de los personajes denunciados, pero son muchos los criterios de juicio que distintos sectores movilizan a la hora de votar", señala Pereyra, y aporta ejemplos del pasado: Carlos Menem fue reelegido en 1995 poco después del escándalo por el contrabando de armas y Erman González fue elegido diputado por la ciudad de Buenos Aires en 1993 dos años después del Swiftgate, cuando era ministro de Economía.

"Estas últimas denuncias pueden tener efectos en algunos votantes y no en otros. No los tendrá para la porción del electorado cuyas prioridades pasan por otro lado, como la economía. Tampoco en el núcleo duro de votantes K. Si podrían tener impacto en el voto de las clases medias urbanas y los independientes", señala García Beaudoux. "Hay extendidos sentimientos de cinismo político en los ciudadanos, que hacen que la corrupción no sea una variable a la hora de decidir el voto. Sin embargo, hay variables contextuales que modifican su impacto. Cuanto más tiempo el tema se mantenga en la agenda y a más crisis económica, mayor impacto. Si, en cambio, baja el dólar, desaparecen las restricciones cambiarias o hay incentivos para el consumo, la corrupción tendrá menos impacto electoral."

De algún modo, nos cuesta pensar que el fraude o los sobornos pueden incrementar la inseguridad o el desempleo, o estén vinculados con el modo en que viajamos en transporte público. Quizá por eso la tragedia de Once se reveló más impactante: mostró en 51 víctimas fatales la relación cercanísima que la corrupción tiene con la vida y la muerte cotidianas.

En efecto, el discurso de condena moral de la corrupción no llega muy lejos. "La indignación de los ciudadanos no alcanza si no hay una propuesta creíble, una estrategia contra la corrupción por parte de la oposición. Otro eslabón débil es la Justicia, que muchas veces es renuente a fallar en contra del poder político y lo hace en buena medida porque eso no tiene costo", dice Herrero.

Indignación, resignación, indiferencia: las etapas del duelo argentino por la ética pública perdida. Con inspiración psicoanalítica, Böhmer agrega otro escalón, el de una complicidad vergonzante: "Puede haber cierta culpa frente a los hechos de corrupción porque vivimos en democracia y esos funcionarios están puestos ahí con nuestro voto. Hay responsabilidad en esa delegación del poder. Cuando alguien siente culpa, la reprime, lo niega, y eso hacemos los argentinos con la corrupción".

CASOS EN LA MEMORIA

Los escándalos de la democracia

Los escándalos de corrupción son un ingrediente habitual de la agenda pública en la Argentina de las últimas décadas. Sin embargo, otras cuestiones suelen imponerse cuando se miden los problemas que más preocupan. En un sondeo reciente de Management & Fit, la corrupción ocupó el cuarto lugar, detrás de la inseguridad, la inflación y el desempleo, en ese orden. □